

La ofensiva contra Harvard

La semana pasada, la administración Trump dio un paso inédito en su guerra contra las universidades de élite de Estados Unidos, al revocar a Harvard la certificación para inscribir estudiantes extranjeros, los que componen el 27% de su alumnado. Esto, luego de que el plantel se negara a entregarle al gobierno una serie de informaciones sobre esos estudiantes, incluyendo sus expedientes disciplinarios y su eventual participación en protestas propalestinas. Un día después, y ante una presentación de la universidad, una jueza federal suspendió temporalmente la medida. Ayer, y en vísperas de una nueva audiencia, el gobierno cambió de estrategia y dio ahora a Harvard un plazo de 30 días para que le presente antecedentes que pudieran justificar no quitarle la certificación. Pero esto supone apenas un respiro dentro de una ofensiva de la administración en la que esa universidad aparece como el blanco más emblemático y que se extiende a varias de las principales instituciones de educación superior estadounidenses.

El gobierno acusa a estas de no combatir el antisemitismo y de ser semilleros de la cultura *woke*, y cuestiona como discriminatorios sus programas de diversidad e inclusión. En esa línea, esta semana las autoridades volvieron a arremeter: el Departamento de Estado ordenó a todas las embajadas y consulados de Estados Unidos en el mundo pausar la programación de nuevas entrevistas para visas de estudiantes, en un memo que anunció la ampliación del escrutinio de redes sociales de los solicitantes. Respecto de Harvard, en tanto, la portavoz de la Casa Blanca acusó: “se ha convertido en un foco de agitadores antiestadounidenses, antisemitas y proterroristas” y “ahora deben enfrentar las consecuencias de sus acciones”.

No puede desconocerse la existencia de problemas en los campus estadounidenses. Efectivamente, las prácticas cancelatorias se han transformado en una grave amenaza al pluralismo y la existencia de agudos sesgos en muchos de los departamentos de humanidades y de ciencias sociales es innegable. Con todo, la ofensiva de la administración Trump, lejos de restablecer necesarios equilibrios, parece más bien una acción de venganza que pone en jaque los principios de libertad académica y autonomía universitaria, desconociendo todo el importante aporte que los planteles de educación superior entregan a Estados Unidos. Ello, sostenido en un discurso populista que alimenta el resentimiento hacia las élites: “Necesitamos más

electricistas, plomeros, y menos graduados LGBTQ de Harvard”, dijo la secretaria de Prensa, Karolina Leavitt, para explicar la posición del gobierno. Este además ha recortado en miles de millones de dólares los fondos que, por diversos programas y contratos, entrega a la universidad.

Ante ese escenario, resulta oportuna la reflexión de Steven Pinker, famoso catedrático de psicología en Harvard y destacada figura intelectual. Pinker, de raíces judías, ha sido un duro crítico de la cultura *woke* y uno de los impulsores del Consejo para la Libertad Académica en esa universidad, precisamente creado para hacer frente a las prácticas cancelatorias. Para él, sin embargo —y así lo advirtió hace unos días en una comentada columna en el New York Times—, los actuales ataques contra Harvard “están fuera de quicio”, al dibujar un escenario en blanco y negro que distorsiona completamente la realidad. Sus propios planteamientos como académico —ha he-

cho notar— son una demostración de que las ideas que se apartan de la “corrección política” siguen encontrando allí un lugar para expresarse. En cambio, pretender intervenir desde el gobierno en sus normativas y programas daña no solo a la universidad, sino a la democracia estadounidense, al debilitar e intentar uniformar una institución clave de la sociedad civil. Con ello además erosiona el liderazgo norteamericano en educación superior, y las ventajas que este le ha traído en términos de innovación y desarrollo.

Este conflicto amerita una particular reflexión desde Chile. Los intentos por debilitar la autonomía universitaria y la libertad académica no son monopolio de un solo sector político y encuentran en la dependencia financiera del Estado una eficaz herramienta de presión. De hecho, si Harvard ha podido hasta ahora resistir y enfrentar la ofensiva de Trump ha sido en gran medida porque —a diferencia de otros planteles estadounidenses— cuenta con un millonario patrimonio y un fondo que le asegura financiamiento. En nuestro país, durante los últimos años —y en especial a partir de la gratuidad—, ha habido un continuo retroceso en la diversidad de fuentes de financiamiento para la educación superior y un paralelo aumento de su dependencia del Estado. El proyecto del Gobierno para un nuevo modelo de financiamiento (FES) exacerba en grado extremo esa tendencia. Suponer que ello no tendrá, tarde o temprano, efectos sobre la autonomía universitaria parece una ingenuidad.

La arremetida del gobierno de EE.UU. contra las universidades de élite entrega lecciones que también en Chile ameritan una reflexión.